

C.A. de Santiago

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que comparece don Hugo Andrés Saldías Donoso, abogado, Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte, en causa RIT 153-2021, RUC N ° 2000056081-3, del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, quien deduce recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 22 de Julio de 2022, que absuelve a CHRISTIAN GUILLERMO VALDIVIA REYES de los delitos de porte ilegal de armas de fuego y de porte ilegal de municiones, previstos y sancionados en los artículos 9 inciso 1º y 2º, respectivamente, de la Ley N°17.798 sobre Control de Armas, en relación al artículo en relación al artículo 2º letra b) y c) de la misma normativa.

El recurso se funda en la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal y artículo 376 inciso tercero por cuanto, en el pronunciamiento de la sentencia, se ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al aplicar equivocadamente el artículo 9 de la ley N° 17.798 de Control de Armas en circunstancias que en este caso no se reúnen los elementos típicos exigidos por la norma que describe el tipo penal.

2º) Que el Ministerio Público acusó por lo siguiente: “El día 14 de enero de 2020 a las 21:45 horas aproximadamente, en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Vivaceta con Domingo Santa María, comuna de Independencia,



el acusado CHRISTIAN GUILLERMO VALDIVIA REYES portaba y transportaba en el vehículo marca Nissan, PPU LFLZ 74, 01 escopeta marca Maverick modelo 88, serie MV55390K que mantenía en su recámara, 03 municiones marca FOPCCHI de calibre 12, y mantenía 07 municiones de la misma marca, calibre 12, y 02 municiones marca SELLIER y BELLOT calibre 12. Además, entre sus vestimentas, mantenía 01 pistola marca GLOCK, modelo 19, serie N° BFVM351, con su respectivo cargador con 14 municiones de calibre 9 mm en su interior. Ambas armas se encontraban aptas para disparar, y las municiones estaban aptas para ser percutadas. El imputado no contaba con las autorizaciones que correspondían para sus respectivos portes o tenencias.”

Se le imputó, por tanto, ser autor de los delitos consumados de porte ilegal de armas de fuego y de porte ilegal de municiones, previstos y sancionados en los artículos 9 inciso 1° y 2°, respectivamente, de la Ley N°17.798 sobre Control de Armas, en relación al artículo en relación al artículo 2° letra b) y c) de la misma normativa.

3° Que en lo resolutivo de la sentencias recurrida se declara, por voto de mayoría:

“I.- Que se absuelve a CHRISTIAN GUILLERMO VALDIVIA REYES, ya individualizado, de la acusación interpuesta en su contra por el Ministerio Público, que le atribuyó ser autor de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, previstos en los incisos primero y segundo del artículo 9 de la Ley 17.798, presuntamente perpetrados el día 14 de enero de 2020.



II.- Que se exime del pago de las costas al Ministerio Público.

III.- Sobre las especies incautadas, deberá procederse a su devolución conforme a las reglas de la Ley 17.798 y del Código Procesal Penal.

Acordada la decisión absolutoria con el voto en contra del juez Raúl Díaz Manosalva (...). ”

3º) Que respecto de la configuración de la causal de nulidad invocada, contemplada como se dijo en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, sostiene el Ministerio Público que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 9 en relación al artículo 2 letras b) y c), ambos de la ley N° 17.798 de Control de Armas, que contempla el tipo penal invocado por la Fiscalía y que queda sin aplicación.

Sostiene que en el fallo absolutorio recurrido, el sentenciador no dio lugar a la aplicación del tipo penal contemplado en el artículo 9 de la ley N° 17.798 de Control de Armas, al estimar que en el proceso se vulneró el artículo 85 del Código Procesal Penal, en cuanto se efectuó un control de identidad ilegal que devino en la ilicitud de la prueba obtenida y, con ello, en la absolución del imputado. Cita lo dispuesto por el considerando Duodécimo de la sentencia y plantea que en él se hace una errónea interpretación de la norma citada, pues, tal como se hizo presente durante la audiencia de juicio oral, el control de identidad realizado al imputado no se encuentra viciado ya que existió un indicio para el actuar de Carabineros. Se expuso y explicó en esa audiencia -agrega-, por dos funcionarios de Carabineros, que un transeúnte les indicó que un



sujeto con ropas y características determinadas y en un lugar específico manipulaba un arma y que, por ello, el personal policial se encontraba mandado -y no sólo facultado- a controlar. Ellos van al lugar, confrontan la información, la cual coincide con lo señalado por el transeúnte y en base a ello controlan. En la inspección ocular corroboran que hay armamento (escopeta) en el asiento de atrás de la camioneta. Personal policial estaba autorizado por el propio artículo 85 del Código Procesal Penal para registrar el vehículo y vestimentas. Además encuentran una segunda arma (pistola) que el acusado portaba al cinto y cargada. De esta manera el procedimiento fue ajustado a derecho. Carabineros no sabía de la inscripción ni que las armas estaban cargadas.

Por lo anterior -dice-, se logró acreditar que el día de los hechos a las 21:45 horas, el acusado portaba dos armas de fuego, aptas para disparar, que no eran de su propiedad, con múltiples municiones, lo que configura el delito previsto en el artículo 9 en relación al artículo 2 letras b) y c), ambos de la ley N° 17.798 de Control de Armas.

Señala que el transporte de armas es extraordinariamente restringido y se amplía un poco en el caso de los deportistas, pero sólo respecto de armas inscritas a su nombre y en caso de transporte al lugar. Sin embargo, a juicio del recurrente ninguna de estas condiciones se cumple en este caso, pues el acusado realizaba otras actividades y si bien declaró que paseaba con las armas, ello ocurrió varias horas más allá de la actividad que pretendía realizar como deportista. Reitera que estas armas estaban cargadas, cuestión prohibida por el artículo 5 de la Ley



17.798; y que aquel debía conocer dicha prohibición en su calidad de deportista. Tampoco se trata de una infracción administrativa del artículo 11 de la Ley 17.798, porque no son armas inscritas a su nombre. Señala, en suma, que se afectó la seguridad pública o colectiva, al manipular dos armas cargadas en la vía pública habiendo afectación de los bienes jurídicos.

Cita el voto de minoría y destaca que, según el disidente:

a) Carabineros procedió a controlar válidamente la identidad del acusado conforme al artículo 85 del CPP y luego registró el automóvil y las vestimentas del mismo, conforme la misma norma los facultaba; y que el examen realizado por un armero de un laboratorio institucional, quien expuso en juicio las operaciones que realizó sobre las evidencias que describió y detalló y que fueron ilustradas al tribunal, conforme a la regularidad de este tipo de peritajes, permite sostener que tanto la pistola como la escopeta en cuestión son armas de fuego aptas para el disparo y que las municiones halladas son compatibles con ellas al ser del mismo calibre y haberse comprobado su utilidad en laboratorio.

b) Que la versión explicativa del acusado, sobre la razón por la que portaba en la vía pública estas armas y municiones que no le pertenecían y que no estaba autorizado a detentar, fue que junto a su padre y vecino poseen armas inscritas, realizan tiro como deporte y se dirigían ese día a un polígono a practicar. Valdivia Reyes argumentó que la escopeta la llevaba él porque Torrejón iría en motocicleta al lugar y que él transportó a su padre. Por diversas circunstancias la práctica no se concretó, se devolvieron, olvidó devolver las armas y pasó a otro lugar a



compartir con amigos, lugar donde en horas de la noche fue fiscalizado por la policía.

c) Que efectivamente se demostró que las armas pertenecían a las personas mencionadas (la escopeta a José Torrejón y la pistola a Héctor Valdivia, padre del acusado), y que conforme informó el Cabo Gabriel Sánchez Albornoz, la misma madrugada se determinó a los propietarios y se apersonaron en la unidad, entregando la misma versión de los hechos. También en juicio se escuchó a Héctor Guillermo Valdivia Iturrieta, padre del acusado, quien relató que esto ocurrió un día en que quedaron de ir a practicar tiro a un polígono cerca de La Moneda, junto a su hijo y José Miguel Torrejón -vecino y amigo-, quien iría en moto pues debía ir a hacer otras diligencias, razón por la que guardó su escopeta en su vehículo. No pudieron ir, se les hizo tarde y volvieron al negocio familiar, se cambió de camioneta y se fue a su parcela cercana a la playa. De madrugada fue llamado por Carabineros, le dijeron que su hijo estaba detenido, volvió y explicó que la escopeta quedó en su camioneta Nissan, debajo del asiento trasero y la pistola quedó en la guantera. Agregó que tiene permiso de tenencia, transporte y deportista para esa pistola Glock, desde el año 2018. Su hijo también tiene permiso para tener armas y transportarlas como deportista.

d) Que los dichos de este testigo, sobre ser propietario de la escopeta, encontraron corroboración en el oficio respuesta consulta armas Folio 12896, emanado del Departamento de Asesoría Técnica de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 15 de enero de 2020, referido a Héctor Guillermo Valdivia Iturrieta, RUT 6.387.160-5, quien registra inscrita la pistola



marca Glock 19 gen 5, modelo 19, serie BFVM351, calibre 9 x 19 mm., además de una boleta de venta y servicios de la sociedad comercializadora “Los Laurie Limitada”, “Armería Los Laurie”, de fecha 28 de septiembre de 2018, donde consta la compra de dicha pistola marca Glock y municiones de 9 milímetros. De igual modo, declaró en juicio José Miguel Torrejón Echeverría, quien confirmó que ese día se pusieron de acuerdo con sus vecinos y amigos Christian y su padre Héctor para ir a un club de tiro donde están inscritos. Él fue en su motocicleta a hacer algunas diligencias, por eso echó su escopeta en la camioneta de ellos, atrás, bajo el asiento, como en una caja que tienen, y Christian se la llevó. Fue al polígono de Zenteno pero al final se devolvieron, quedaron de entregarle la escopeta en el local. Se olvidó de ella hasta como las una a dos de la mañana, en que lo llamaron diciéndole que estaba Christian estaba detenido. Aseguró tener permiso para tener la escopeta, además permiso para deporte, todo de modo legal, desde el año 2007. La propiedad de esa escopeta fue confirmada a través del oficio respuesta consulta armas Folio 12896, emanado del Departamento de Asesoría Técnica de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 15 de enero de 2020, referido a José Miguel Torrejón Echeverría, RUT 9.211.055-9, quien registra tres pistolas inscritas y una escopeta marca Maverick, modelo 88, serie MV55390K, calibre 12. Además la defensa incorporó un carnet de socio del club de caza, pesca y tiro deportivo Target sport, de don José Miguel Torrejón Echeverría; una copia de la licencia de conducir de don José Miguel Torrejón, clase C, para conducir motocicletas; permiso para transporte de armas de José Miguel Torrejón Echeverría



emanado de la Dirección general de movilización nacional y Certificado de inscripción de motocicleta marca Kinlon, color blanco, patente DZD025-4, inscrita a nombre de José Torrejón Echeverría. Para acreditar que el acusado también practica deporte en el polígono de tiro referido, se presentó un carnet de socio del club de caza, pesca y tiro deportivo Target sport, de Christian Valdivia Reyes.

e) Que sin perjuicio de lo señalado, se demostró que el acusado Valdivia Reyes presenta inscripciones de armas y autorización de tenencia, pero no de aquellas que le fueron encontradas portándolas en la vía pública, que pertenecen a su vecino y su padre. En efecto, el oficio de la D.G.M.N. Ministerio de Defensa, Autoridad Fiscalizadora N°28, recibido con fecha 03.03.2020, referido a la consulta de autorización para tenencia y porte de armas respecto del acusado CHRISTIAN GUILLERMO VALDIVIA REYES y anexos, señala que registra tres armas inscritas: pistola Beretta 9 mm. -robada-, Taurus -deporte- y pistola CZ92 -deporte-; que no cuenta con permiso de porte, sí de deportista y que posee permiso para compra de municiones, adjuntando un detalle de compras. Además se contó con el Oficio respuesta consulta armas Folio 12896, emanado del Departamento de Asesoría Técnica de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 15 de enero de 2020, referido al consultado Christian Guillermo Valdivia Reyes, quien registra las mismas tres armas inscritas ya señaladas, que no son aquellas con las que portaba, materia de la acusación.

f) Que con toda la prueba rendida sobre este punto, el tribunal concluye en la existencia de una tesis explicativa del



porte de estas armas y municiones que pertenecen a terceros, lo que sin embargo no tiene un impacto sobre la falta de autorización para portarlas pues se trata de una conducta que le estaba prohibida al acusado, quien no tenía inscritas dichas armas ni contaba con autorización específica para transportarlas o detentarlas en la vía pública. La tesis del acusado -dice el disidente- pretende obviar además el hecho de que éste portaba dos armas de fuego, cargadas, una en el cinto, en la vía pública, pese a que su padre indicó que su pistola la dejó en la guantera; y que lejos de la intención original de ir a un polígono de tiro, el acusado mantenía las armas horas después, en la noche y en la vía pública. Además, se trataba de una persona con conocimientos específicos sobre las autorizaciones y forma de tenencia, traslado y práctica deportiva con armas y aun así mantenía en su poder armas de terceros, pero llamativamente ninguna propia, considerando que aduce que él también se dirigía a practicar tiro esa tarde. No hay razón alguna para descartar la lesividad del hecho ni transformar el porte en atípico, como pretendió su defensa.

Termina el recurrente reiterando que, a su juicio, el tribunal hace una interpretación y aplicación inexacta y errónea del tipo penal contemplado en el artículo 9 en relación al artículo 2 letras b) y c), ambos de la ley N° 17.798 de Control de Armas, lo que los lleva a absolver al requerido por entender que no se tuvieron por acreditados todos los elementos del tipo penal. Pide que se acoja este recurso de nulidad y que se declare la nulidad de la audiencia de juicio oral y de la sentencia dictada en ella, determinando el estado en que hubiere de quedar el



procedimiento; y que se ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio.

4º) Que en conformidad al artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, procede la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia en la medida que en el pronunciamiento de ésta se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho y que ésta hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

El señalado motivo de nulidad, por tanto, es pertinente solo en aquellos casos en que los sentenciadores apliquen incorrectamente la ley llamada a resolver la cuestión que motiva la controversia, por lo que se trata de un medio de impugnación de carácter extraordinario y de derecho estricto, en donde las infracciones alegadas deben tener además una relevancia tal que hagan variar lo decidido de una manera radical; o dicho de otra forma, la contravención de derecho de que trata la norma legal citada tiene un componente normativo que, como tal, debe ser entendido sobre la base del concepto de norma jurídica más allá de cualquier constructo doctrinal y, por cierto, de las discrepancias que puedan manifestar las partes en cuanto a la forma en que los jueces del fondo identifican los hechos a los cuales debe aplicarse la norma de derecho.

5º Que al fundar el recurrente la causal de nulidad que invoca en la circunstancia de que los sentenciadores no han aplicado lo dispuesto en el artículo 9 en relación al artículo 2 letras b) y c), ambos de la ley N° 17.798 de Control de Armas, pese a encontrarse debidamente acreditados a su juicio los



presupuestos del tipo penal, no hace más que introducir un componente fáctico que se aparta del marco jurídico de derecho estricto de la señalada causal, adentrándose por esa vía en el análisis de la prueba que realizan los jueces del fondo para arribar a su decisión absolutoria.

Toda la fundamentación del recurso de nulidad, en efecto, discurre en torno a la prueba rendida en el proceso y a la ponderación de la misma, por parte de los sentenciadores, reclamándose allí por aquella que a juicio del ente persecutor debió ser considerada, pero que no lo fue, y de cómo esa omisión repercute en la decisión de absolver el imputado al no resultar acreditados los presupuestos del tipo.

En este punto, además, el recurrente tampoco se hace cargo de una eventual infracción del artículo 85 del CPP, según desliza al inicio de su libelo, limitándose a señalar simplemente que, a su entender, en la especie sí existieron indicios para el actuar de Carabineros; planteamiento éste que, por lo demás, involucra nuevamente un reproche a la forma en que los sentenciadores de mayoría analizan la prueba reunida sobre este punto (considerando Duodécimo), más no un error en la aplicación del derecho a los hechos establecidos.

El reclamo del recurrente no apunta, en suma, a denunciar un error de aplicación del derecho, sino, por el contrario, a cuestionar la absolución del acusado por no haberse establecido a su respecto los presupuestos contemplados en el tipo penal por el que se le acusa; y ello, como se acaba de señalar, supera el marco de aplicación de la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.



6° Que en consecuencia, la conclusión de esta Corte es que no se configura el vicio de anulación invocado por el recurrente, lo que determina que el recurso en examen no pueda prosperar y deba ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo que disponen los artículos 273, 372, 374, 380 y 384 del Código Procesal Penal, se declara que **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por don Hugo Andrés Saldías Donoso, Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Fiscalía Regional Metropolitana Zona Centro Norte, en contra de la sentencia definitiva dictada en causa RIT 153-2021, RUC N ° 2000056081-3, del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que no es nula.

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese al tribunal de origen, por la vía más rápida.

Redacción del abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

N°Penal-3458-2022.



Pronunciada por la Tercera Sala, presidida por la Ministra señora
Dobra Lusic Nadal, Ministra
(S) señora Isabel Margarita Zúñiga Alvayay y el abogado
integrante señor Eduardo Jequier Lehuede.
No firma la Ministra(S) señora Isabel Margarita Zúñiga Alvayay
por haber cesado su suplencia y el abogado integrante señor
Eduardo Jequier Lehuede por encontrarse ausente, no obstante
haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo.
Autoriza el (la) ministro de fe de esta Il. Corte de Apelaciones
de Santiago.
En Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el
estado diario la resolución que antecede.





Proveído por la Presidenta de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a nueve de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>